TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CUNDINAMARCA

SALA CIVIL – FAMILIA

Bogotá D.C., septiembre veinte de dos mil veintiuno.

Proceso : Sucesión.
Radicación : 25754-31-10-001-2010-00151-02.

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la cónyuge sobreviviente contra el auto proferido el 21 de enero de 2021 por el Juzgado de Familia del Circuito de Soacha.

ANTECEDENTES

1. Dentro del proceso de sucesión del señor Guillermo Rodríguez Gutiérrez, se decretó el embargo del inmueble identificado con matrícula No. 051-975, de propiedad de la cónyuge superviviente Ana Silvia Rodríguez García, pues denunció el bien como perteneciente a la sociedad conyugal, una vez inscrita la medida se comisionó al Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha para que adelantara su secuestro, diligencia que se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2019.

En ese acto, a través de apoderado, la cónyuge superviviente formuló oposición al secuestro alegando que se trataba de un inmueble que era bien propio suyo, adquirido mediante declaración judicial de pertenencia por haber ejercido su posesión desde el año 1977, por lo que, aun cuando las sentencias que definieron el asunto se profirieron en 2002 (en vigencia del matrimonio), el artículo 1792 del C.C. señalaba que las especies que los cónyuges poseían antes de la sociedad, no hacían parte del haber social, aunque la declaratoria de prescripción se haya producido durante su vigencia.

La comisionada rechazó de plano la oposición formulada, pero apelada la decisión se dispuso por el Tribunal la revocatoria de la decisión inicialmente la oposición de la señora Rodríguez, al desatar el recurso de apelación por ella interpuesto, se revocó esa determinación y se ordenó darle trámite.

2. El auto apelado

En audiencia del 21 de enero pasado, el a-quo encontró que la señora Rodríguez sí ejercía actos de posesión sobre el inmueble disputado, dado que lo había dado en arrendamiento a terceros, pero que en aplicación del numeral quinto del artículo 309 del C.G.P., como los herederos habían insistido en el secuestro, debía mantenerse la cautela y dejarse a la cónyuge superviviente como secuestro del predio.

Agregó que la discusión que planteaba su apoderado era propia de la audiencia que se adelantaría para resolver la objeción a los inventarios y avalúos, con el fin de determinar si el bien cuyo dominio y posesión detenta la señora Ana Silvia se trata de un bien propio o de un bien social, pero que el debate de esa instancia se ceñía a la vigencia de la medida cautelar.

3. La apelación

Inconforme con la decisión la opositora recurre en recurso de reposición y subsidiaria apelación, insiste en que por lo dispuesto en el artículo 1792 del C.C., reiterando que como había adquirido el inmueble mediante prescripción decretada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha y esta corporación, aun en vigencia de la sociedad conyugal, el bien no había ingresado a la sociedad conyugal, se trataba de un bien propio.

Pide se levante la medida cautelar y se considere que con los frutos que produce el bien la cónyuge superviviente satisface los gastos necesarios para su subsistencia y salud.

CONSIDERACIONES

1. El numeral segundo del artículo 309 del C.G.P., al que hace remisión el artículo 596 ibídem (que regula las oposiciones al secuestro), establece que toda persona que se encuentre en poder del bien a cautelar y contra quien la sentencia no produzca efectos, puede oponerse a la práctica de la diligencia, si “en cualquier forma alega hechos constitutivos de posesión y presenta prueba siquiera sumaria que los demuestre”.

De dicha norma, se puede extraer que para que prospere la oposición al secuestro son necesarias dos situaciones: (i) que la sentencia no produzca efectos contra el opositor, y (ii) que la persona que se opone tenga en su poder el bien, demostrando sumariamente hechos constitutivos de su posesión, al ser ésta alegada.

De esa manera, los artículos 309 y 597 ibídem contemplan que el poseedor puede oponerse al secuestro, ya sea al momento mismo de adelantarse la diligencia, en los cinco (5) días siguientes, si el tercero estuvo presente en la diligencia sin la representación de apoderado judicial o en los veinte días (20) siguientes, en caso de los terceros poseedores que no estuvieron presentes en la diligencia de secuestro.

Como se anotó en la decisión anterior de esta instancia en el mismo asunto, no hay duda de la viabilidad de la oposición, aún estando la opositora vinculada con los efectos del fallo a emitir en el proceso al que refiere la cautela, si se considera que en el trámite liquidatorio de la sociedad conyugal que a la par con la sucesión se liquida, el artículo 598 numeral 4° dispone expresamente que: “4. Cualquiera de los cónyuges o compañeros permanentes podrá promover incidente con el propósito de que se levanten las medidas que afecten sus bienes propios.”

2. En este caso, en diligencia de secuestro del inmueble identificado con matrícula No. 051-975, la cónyuge superviviente Ana Silvia Rodríguez García presentó oposición alegando que el bien era propio por haber sido adquirido mediante prescripción declarada judicialmente, aunque en vigencia de la sociedad conyugal referida a hechos acontecidos con anterioridad a su conformación.

Aunque la jueza comisionada rechazó la oposición, en auto del 13 de mayo de 2020 este Tribunal revocó la decisión señalando que: *“claro es que, en general, en los trámites liquidatorios de la sociedad conyugal, el artículo 598 numeral 4 del C.G.P., permite que se debata el levantamiento de una cautela allí decretada porque considera que el bien embargado es propio y no social, que es en últimas lo que propone la opositora, que no por ser cónyuge superviviente y estar vinculada con la sentencia que allí de emita, tiene limitado el ejercicio de su derecho a resistirse a la cautela del inmueble que considera en bien propio y no social.*

Es decir, aunque este conflicto del régimen económico matrimonial (...) tiene otros espacios procesales de solución, temporal y definitiva, distintos a este trámite que por ahora se limita a definir si debe o no tramitarse la oposición que presenta la cónyuge (...), nada impide que se discuta la oposición que presenta la cónyuge superviviente, pues ella se centra en el debate de si el inmueble cautelado es un bien ganancial o un bien propio y con ello si la cautela debe o no levantarse.

Abora bien, tampoco puede ser motivo suficiente para negar que el debate de oposición se surta, la sola circunstancia de haberse presentado en el curso del trámite sucesoral la objeción al inventario y avalúo para definir la exclusión o permanencia del bien denunciado en el haber de la sociedad conyugal que conjuntamente con la herencia se liquida, pues no hay norma que imponga tal restricción y si la que autoriza plantear el debate”¹ (Énfasis de la Sala). Por ello, se ordenó al a-quo dar trámite a la oposición y resolver de fondo la discusión que allá expuso la cónyuge superviviente.

¹ TRIBUNAL DE CUNDINAMARCA. Sala Civil-Familia. Auto del 13 de mayo de 2020. Rad. 25754-31-10-001-2010-00151-01.. M.P.: Juan Manuel Dumez Arias.

3. Sin embargo, en la audiencia del 21 de enero de la presente anualidad el Juez de Familia advierte que la oposición prospera, pero aduce que como los herederos insistían en la práctica de la medida era necesario mantenerla dejando como secuestre a la opositora y que: *“ya será en la etapa de la audiencia donde resolvamos lo pertinente a si se trata de un bien social o un bien propio, donde se decida lo pertinente respecto a la medida cautelar, si la medida continúa o se levanta”* y que *“el argumento que (...) esboza [el apoderado de la cónyuge sobreviviente] se refiere más bien a la controversia que tiene que suscitarse en la audiencia para resolver la objeción a inventarios y avalúos para determinar si el bien cuyo dominio y posesión detenta la señora Ana Silvia Rodríguez García se trata de un bien propio o de un bien social, de tal suerte que tratándose aquí solamente de la diligencia de secuestro, se ha determinado que efectivamente la señora Ana Silvia Rodríguez García, quien hace oposición a esta diligencia, es poseedora de ese bien inmueble”* (Énfasis de la Sala).

Esto es, de una parte dijo aplicar un supuesto de hecho de una norma jurídica que no se estructura en el caso, pues está concebido en el artículo 309 del C.G.P. numeral 5° para cuando: *“Si se admite la oposición y en el acto de la diligencia el interesado insiste expresamente en la entrega, el bien se dejará al opositor en calidad de secuestre.”*, y en el caso, en la diligencia de secuestro el juez comisionado rechazó la oposición y fue el Tribunal que al revocar esa decisión la admitió y envió el expediente al juez comitente para que de fondo resolviera la oposición.

Y de otro lado, eludió el a-quo resolver de fondo el asunto aduciendo que el carácter de bien propio y no social del inmueble que era objeto de la cautela, cuya discusión es el soporte de la oposición admitida a la cónyuge supérstite atendiendo lo dispuesto en el artículo 598 numeral 4° del C.G.P., pospuso su definición a la discusión y resolución de la objeción al inventario y avalúo que anunció se había propuesto por idéntico motivo y sobre el mismo inmueble.

4. Ante esta situación, debe precisarse que, en aplicación del principio de seguridad procesal, la ley no permite que el juez oficiosamente modifique o revoque su propia decisión, pues sólo cuando media solicitud de aclaración o recurso de reposición, elevado dentro del término de ejecutoria, puede aquél entrar a revisar su providencia.

Pues “la imposibilidad de modificar lo decidido a través de autos interlocutorios se explica también por el carácter vinculante de las providencias judiciales, el cual se proyecta entre las partes, pero también respecto del juez que las profiere. En relación con este punto la jurisprudencia explicó: “El carácter vinculante de las decisiones judiciales contribuye a la eficacia del ordenamiento jurídico. Sólo si las sentencias son obedecidas, el derecho cumple una función social. Pero las sentencias no sólo vinculan a las partes y a las autoridades; también el juez que las profiere está obligado a acatar[las]”².

Carácter vinculante de las decisiones que se predica de las providencias judiciales, en general, después de que cobran ejecutoria, “el juez sólo puede apartarse de lo decidido en un auto interlocutorio si es la ley la que establece un mecanismo para ello o si la conclusión del proceso que ha de consignarse en la sentencia no armoniza con la decisión previa”³.

Con mayor razón si la decisión que ata al juez proviene de una decisión ejecutoriada de su superior, pues el trasgredir ese mandato de vinculación a lo resuelto por su superior está elevado en el numeral segundo del artículo 133 del C.G.P. a causal de nulidad procesal, el proceder contra providencia ejecutoriada del superior.

Norma que se funda en el respeto a la estructura jerárquica que acompaña al poder judicial, el respeto de los niveles de distribución funcional de la competencia y que torna en inválida la actuación que se produce con desconocimiento o desobediencia de lo ordenado observar por el superior, en decisión que cobró ejecutoria.

² CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-1274 del 6 de diciembre de 2005. Ref: expediente T-1171367. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

³ Ibid.

Vicio que señala la jurisprudencia civil se configura ante “(...) la desobediencia o falta de cumplimiento (de) lo ordenado concretamente por el superior (...)”. Por lo tanto, para que se estructure el defecto adjetivo deben avizorarse actos de rebeldía al cumplimiento o satisfacción de la decisión proferida por ad quem”, esto es, lo que la causal busca es “**preservar el orden de los procesos y el acatamiento de las decisiones judiciales por parte de los jueces que, siendo de grado inferior dentro de la competencia funcional que se ejerce en relación con un proceso determinado, deben cumplir con las decisiones que profieran los jueces de grado superior, cuando éstos resuelvan los recursos de queja, súplica, apelación, casación y revisión, o en su caso la consulta**”⁴ (Énfasis de la Sala).

5. Volviendo al caso se evidencia que aun cuando el ad-quem decidió que era procedente definir de fondo la oposición al secuestro que la cónyuge supérstite planteaba argumentando ser poseedora del inmueble objeto de la cautela que era un bien propio suyo y no social, el a-quo desconoce la decisión emitida por su superior y decide no resolver de fondo el asunto porque considera que no es la oposición al secuestro el escenario para establecer si el inmueble secuestrado es bien propio de la opositora o pertenece o no a la sociedad conyugal, pues ese asunto lo definirá en la audiencia de objeciones a los inventarios y avalúos donde también se planteó similar debate.

Con esa providencia configuró la causal de nulidad mencionada, pues emitió pronunciamiento desconociendo la decisión ejecutoriada de su superior, auto del 13 de mayo de 2020 que adquirió ejecutoria desde el 19 de mayo siguiente, que le ordenó resolver de fondo la oposición formulada por la cónyuge supérstite soportada en el numeral 4 del artículo 598 del C.G.P., puesto que no existía ninguna norma que impidiera que la cónyuge pudiera elevar tal reclamo en esa etapa procesal argumentando el carácter de bien propio suyo del inmueble cautelado; irregularidad procesal que conforme lo dispone el parágrafo del artículo 136 del C.G.P. es insaneable.

En conclusión, se declarará la nulidad de lo actuado por el Juzgado de Familia de Soacha en desconocimiento de la decisión emitida por el Tribunal en este asunto el 13 de mayo de 2020 y se dispondrá que renueve lo declarado nulo emitiendo una decisión a la oposición al secuestro elevado por la cónyuge supérstite, que atienda lo ordenado en la citada providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil–Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,

RESUELVE

DECLARAR LA NULIDAD del auto proferido el 21 de enero de 2021, desconocimiento de la decisión emitida por el Tribunal en este asunto el 13 de mayo de 2020 y se dispondrá que renueve lo declarado nulo emitiendo una decisión a la oposición al secuestro elevado por la cónyuge supérstite Ana Silvia Rodríguez García, que atienda lo ordenado en la citada decisión,

NOTIFÍQUESE

JUAN MANUEL DUMEZ ARIAS
Magistrado

Firmado Por:

⁴ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de mayo de 2017. SC6795-2017. Radicación n° 63001-31-03-002-2006-00028-01. M.P.: Margarita Cabello Blanco.

Juan Manuel Domez Arias
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
División De Sistemas De Ingenieria
Bogotá D.C., - Bogotá, D.C.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

ea668cd991608103cd0c6bfcfd6307ceca2c65589e9577d02a9a351a59226582

Documento generado en 20/09/2021 09:44:48 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>